

lez contra la órden del ministerio de gobernacion, á que se refiere el presente juicio.

Devuélvase las actuaciones al juzgado de que proceden con testimonio de este fallo, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre treinta de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado 1º de Distrito de México por el C. Otero Chavira, contra la órden del ministerio de gobernacion, de 8 de Agosto de este año, por la que se previene al ayuntamiento de esta ciudad se adjudique á D. Frigo Noriega la casa núm. 10 de la calle de S. Andres.

No se publica el pedimento fiscal, la sentencia del C. juez de Distrito y la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia, por ser sustancialmente iguales al pedimento, sentencia y ejecutoria anteriores.

CONSULTA.

Sobre revision de sentencias en los juicios civiles y criminales que se siguen en los juzgados y tribunales de la federacion.

El tribunal de Circuito de Guadalajara con fecha 10 de Agosto, remitió á esa Corte Suprema de Justicia la siguiente copia.

“Guadalajara, Agosto nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Se aprueba el auto que en 13 de Julio del año próximo pasado pronunció el juez de Distrito de Zacatecas, en que mandó sobrescer en esta causa instruida contra el C. Lic. Apolonio G. de la Cadena y socios. Hágase saber á dicho juez.

Y en cuanto á la peticion del C. promotor, relativa á la remision, para el objeto que indica, de esta sumaria á la Corte Suprema de Justicia, no se accede á ella, porque este tribunal estima no vigente la ley de 14 de Febrero de 1826, en razon de haberse sancionado bajo las prescripciones de la Constitucion de 1824 y haberse expedido posteriormente otras relativas á tribunales federales, como la de 22 de Mayo de 1834, en que se refundió la de 20 del mismo mes y año de 26, la cual no impone tal obligacion; corroborando este tribunal su juicio en este respecto:

Primero; en que en las atribuciones que la Constitucion general de 1857, concede á la Corte Suprema de Justicia, no se encuentra la de revisar los actos ejecutoriados de los tribunales de Circuito; y

Segundo; en que en ninguna de las sentencias pronunciadas por estos y publicadas en el “Semanario Judicial de la Federacion,” ha visto el magistrado que suscribe que se disponga hacer la remision de las causas civiles y criminales á dicha Corte Suprema, excepto en grado, ó las copias de las sentencias en los términos que lo previene en su circular de 31 de Diciembre de 1870.

Remítase testimonio de este auto á la repetida Corte Suprema de Justicia, para que si lo tiene á bien, se sirva declarar si se estima ó no vigente la ley de 14 de Febrero de 1826 en la parte que dispone el envío de todo negocio concluido y ejecutoriado para su revision.—*Leonides Torres*, —*Tomás Bravo*, secretario.—Concuerda con su original.

Guadalajara, Agosto nueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Tomás Bravo*, secretario."

Se mandó pasar al C. Procurador general de la Nacion, quien presentó el siguiente pedimento.

"El Procurador general de la Nacion, dice: que el juez de Distrito de Zacatecas pronunció un auto de sobreseimiento en la causa instruida contra el C. Apolonio García de la Cadena y socios, por delito de conspiracion. El magistrado de Circuito de Guadalajara confirmó dicho auto; pero habiéndole pedido su promotor fiscal que remitiese el proceso á esta Suprema Corte para su revision, el tribunal se negó á hacerlo fundándose en que no estima vigente la ley de 14 de Febrero de 1826 que previene tal revision.

Para el procurador general no es dudoso que está vigente la ley de 14 de Febrero de 1826; y puede citar centenares de ejecutorias de esta misma Corte en que ha tenido por fundamento las prescripciones de dicha ley. Precisamente en materia de revision de procesos, hay multitud de respuestas del procurador general de las que en unas ha pedido llanamente se dé por revisado el proceso, y en otras ha promovido lo conveniente porque notaba infracciones de la ley de procedimientos. El que suscribe no recuerda un solo caso en que la 1ª sala no haya decretado de conformidad con esos pedimentos; y esto prueba con evidencia que la sala reputa vigente la ley de 14 de Febrero citada, y con mas especialidad en materia de revision de procesos.

Es tambien de advertir que los tribunales de Circuito de Querétaro, Mérida, Distrito federal y algun otro han elevado siempre, no solo las causas que vienen en grado de súplica, sino tambien aquellas en que la sentencia ha causado ejecutoria; y la 1ª sala debe recordar que el procurador general ha llamado distintas veces su atencion, sobre que los otros tribunales de Circuito no llenan este último deber.

Ya que la ocasion se presenta, es conveniente explicar en qué casos, por qué motivos, y para qué objetos debe remitirse á este tribunal de 3ª instancia las causas criminales que se siguen en los tribunales de la federacion. Cuando las sentencias de 2ª instancia no causan ejecutoria, es incontestable que deben venir en grado de súplica, ya se trate de causa criminal ó de negocio civil; pero cuando la sentencia de 2ª instancia ha causado ejecutoria, entonces no quedan mas recursos que el de nulidad en negocios civiles y el de responsabilidad en estos y en los criminales. La responsabilidad en negocio civil, es un derecho que la ley concede á los que han litigado: la responsabilidad en causa criminal puede ser un derecho del que ha sido condenado, y puede ser tambien una obligacion del Ministerio público á cuyo cargo está examinar las infracciones que pueda haber en los procedimientos y promover sobre ellas lo que estime justo en la vía de responsabilidad. A este último caso se ha referido el art. 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826 al prevenir que los negocios criminales ejecutoriados en 2ª instancia sean remitidos para su revision á la Suprema Corte de Justicia. Tal prevencion es, no solo justa, sino tambien lógica; porque habiendo dispuesto el art. 33 anterior que ninguna causa criminal pueda tener menos de dos instancias, es claro que la ejecutoria no puede causarse sino en la segunda; y entonces la responsabilidad solo es posible, por el tribunal de 3ª instancia; resultando así que la revision de todos los procesos

debe hacerse por la 1ª sala de la Suprema Corte de Justicia.

La regla anterior tiene una excepcion que se refiere á los juicios de contrabando, respecto de los cuales no rige el principio de que precisamente tengan dos instancias, y en los que por consiguiente la ejecutoria puede causarse ya en la 1ª, ya en la segunda ó bien en la 3ª instancia. La pauta de comisos que ha establecido esta regla para el comercio interior y la ordenanza general de aduanas marítimas que la aceptó para el comercio exterior, han debido adoptar, y en efecto adoptaron la de que en estos juicios la revision del proceso se haga por el superior inmediato de la instancia en que se causó la ejecutoria. Esto no debe parecer extraño porque los juicios de comiso no son criminales en el sentido propio y riguroso de la palabra. Lo que realmente se versa en ellos, es el interés pecuniario del fisco; y la accion penal queda reservada para el juicio criminal de contrabando que debe abrirse inmediatamente despues del de comiso; y este juicio criminal queda, en punto á revision, sujeto á las prescripciones del art. 34 de la ley de 14 de Febrero de 1826.

De lo expuesto resulta como regla general, que toda sentencia en causa criminal que cause ejecutoria en 2ª instancia, debe elevarse á la Suprema Corte de Justicia para la revision del proceso; y que si este precepto no comprende á los juicios de comiso, es porque en ellos domina el carácter civil, mas que el criminal.

En estos términos creo que debe contarse al tribunal de Circuito de Guadalajara la consulta que contiene su nota de 10 de Agosto; y convendría tambien comunicar la resolusion á todos los tribunales de Circuito para que cumplan el deber que les impone el art. 34 tantas veces citado de la ley de 14 de Febrero de 1826.

México, treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y uno.—*L. Guzman.*"

Dada cuenta de este pedimento se acordó lo siguiente:

"México, Diciembre diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Trascribáse al tribunal de Circuito de Guadalajara en respuesta á su comunicacion relativa, y á los otros siete tribunales de Circuito, para que procedan segun lo expuesto en este pedimento conforme á la ley. Publíquese.—Una rúbrica.—*Aguilar*, secretario."

Lo que comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes.

Independencia y libertad. México, veintidos de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno.—Lic. *Agustin Peralta*, oficial mayor.—C. redactor del "Semanario Judicial."—Presente.

CONSULTA.

La que hizo el promotor fiscal del tribunal de Circuito de Guadalajara, sobre la vigencia de varias leyes federales, pedimento del C. procurador general sobre dicha consulta, y acuerdo de la Suprema Corte de Justicia.

El C. Promotor fiscal del tribunal de Circuito de Guadalajara con fecha 8 de Agosto próximo pasado, dirigió á esta Corte Suprema de Justicia la siguiente comunicacion.

"Antes de expedirse en la última dictadura de D. Antonio Lopez de Santa Anna, la ley de 23 de Julio de 1853, los tribunales de la federacion ajustaban sus procedimientos judiciales á las leyes de 14 de Febrero y 20 de Mayo de 1826, 22 de Mayo de 1834 y 23 de Mayo de 1837.

La ley de 23 de Noviembre de 1855 dispuso en su art. 1º que: los tribunales ajustaran sus procedimientos á las leyes que regian con anterioridad á 31 de Diciembre de 1852, y en su art. 77 derogó